



Llevar una vida sencilla

por Meenakshi Raman

Las respuestas que se dan a la crisis internacional del cambio climático provocado por el excesivo e insostenible consumo de combustibles fósiles, en particular en el norte, son actualmente insuficientes, y esto reviste gravedad. Si se trata realmente del problema que define este siglo, es necesario realizar, como mínimo, un cambio fundamental.

Las comunidades pobres y vulnerables de los países en desarrollo (que son los menos responsables del cambio climático) son las más duramente golpeadas por sus efectos y por las falsas soluciones que se promueven para hacer frente a este problema. Se trata de una cuestión que afecta al desarrollo, los derechos humanos y la justicia. Los países que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero constantes a lo largo de la historia tienen riqueza suficiente para actuar y la obligación de hacerlo. El consumo no equitativo de recursos por el norte, y su explotación de los recursos procedentes del sur, han creado una deuda ecológica que debe resarcirse.

La ciencia nos dice que, si se pretenden evitar los efectos más peligrosos, el aumento de la temperatura media mundial debe mantenerse por debajo de los dos grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. Esto supone que la concentración a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero no puede exceder las 450 partes por millón del equivalente en dióxido de carbono, si bien, incluso con este nivel, determinados países, comunidades y especies sufrirán consecuencias catastróficas.

La ciencia indica además que la producción mundial de gases de efecto invernadero debe reducirse por lo menos a la mitad para mediados de siglo, partiendo de los niveles de 1990. Por lo tanto, tiene que llegarse a un acuerdo sobre los principios de 'distribución de la carga' entre el norte y el sur. A mayor reducción por parte de los países desarrollados, menor carga para los países en desarrollo.

Por ejemplo, resulta insuficiente, sin lugar a dudas, que las naciones desarrolladas reduzcan sus emisiones entre un 60 y un 80 por ciento como parte de la reducción mundial del 50 por ciento para 2050. Examinemos, como lo ha hecho la Red del Tercer Mundo, qué supondría esta reducción en la práctica para el sur. En 1990, el mundo produjo 38.600 millones de toneladas de dióxido de carbono; disminuir esta cifra a la mitad significa llegar a los 19.300 millones. La parte inicial del norte fue un poco menos de la mitad, es decir 18.400 millones de toneladas, y tras un recorte del 70 por ciento se reduciría a 5.500 millones; lo que dejaría a los países en desarrollo el objetivo de 13.800 millones, un 33,3 por ciento menos de su nivel de 1990, que fue de 20.400 millones de toneladas. Ahora bien, si tenemos en cuenta que se prevé un aumento de su población a más del doble en ese período, sus emisiones per capita tendrían que reducirse en un 65 por ciento.

Hay que realizar un debate abierto para ver si esa reducción es justa, y si debería llevarse a cabo. Dada la responsabilidad histórica del norte, y la calidad de vida que ha alcanzado a expensas de la atmósfera y del 'espacio ambiental' del sur, le corresponde verdaderamente la responsabilidad de abordar las repercusiones de lo que parece ser una carga injusta para los países en desarrollo.

El meollo de la cuestión es si somos capaces de encontrar una vía de desarrollo sostenible para los países en desarrollo, y cómo buscarla, que consiga no sólo estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también mejorar las condiciones de vida y mitigar la pobreza en un marco ecológico, y que permita aplicar nuevas políticas en los ámbitos agrícola, industrial, comercial y financiero.

Se trata de un inmenso desafío en materia de desarrollo que no debería subestimarse haciendo predicciones en el sentido de que, para resolver el problema, bastaría con invertir entre el 1 y el 3 por ciento del PNB. Hay que trabajar mucho más y adoptar nuevas medidas para demostrar cómo pueden los países en desarrollo recorrer una vía de desarrollo que sea a la vez sostenible y con bajo consumo de carbono.

Para avanzar en este camino es necesario adoptar las medidas siguientes:

Los países desarrollados deben iniciar urgentemente el gran salto de reducir de manera espectacular sus emisiones, y así dar a gran parte del mundo en desarrollo el espacio ambiental para impulsar el desarrollo sostenible que haga posible satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes y superar la pobreza. Por tanto, debe haber un diálogo franco sobre el acuerdo para la distribución de la carga.

Es necesario cambiar el estilo de vida, en especial en el norte y en la clase privilegiada del sur. No se ha prestado suficiente atención a esta cuestión fundamental, aunque

en las conclusiones de la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río en 1992, se hizo hincapié en que hay que modificar las pautas de consumo y los sistemas de producción. Cuando hay tanto en juego, no podemos permitirnos mantener la postura de que el estilo de vida de los ricos no es negociable. Incluso en el cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se señala que los cambios del estilo de vida y de las pautas de comportamiento pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los cambios deben centrarse en la protección de los recursos y deben contribuir a crear una economía con menor consumo de carbono que sea equitativa y sostenible al mismo tiempo. Tenemos que llevar una vida sencilla para que otros puedan simplemente vivir.

Hay que aportar inmediatamente a los países en desarrollo los recursos financieros y la tecnología que necesiten para emprender el camino de reducir el consumo de carbono. Debe haber un enorme incremento de los fondos y recursos públicos que se transfieren del norte al sur, y no depender simplemente del sector privado y los mercados del carbono para obtener la financiación adicional necesaria para cubrir los gastos de mitigación, adaptación y reconstrucción, fórmula por la que se aboga actualmente. Los ingresos para financiar estos gastos pueden obtenerse de la reasignación de gastos militares, la cancelación de deudas, la aportación de los beneficios derivados de fijar límites máximos a las emisiones y subasta los desechos de emisión, así como el aumento de impuestos y gravámenes.

Determinadas barreras, como las normas de propiedad intelectual, impuestas a la transferencia de tecnologías inocuas para el clima a los países en desarrollo, y al empleo de las mismas, deben eliminarse o flexibilizarse. Las alternativas tecnológicas que algunas personas proponen, por ejemplo: energía nuclear, árboles modificados genéticamente (con el argumento de mejorar las especies), combustibles agrícolas, grandes plantas de energía hidroeléctrica, captación y almacenamiento de carbono, son todas soluciones falsas ya que presentan graves riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad, y pueden tener diversas repercusiones sociales perjudiciales. Debería darse más importancia y prioridad al uso eficiente de la energía y a la energía renovable, en especial a las energías solar y eólica. Es imprescindible crear formas descentralizadas de producción de energía destinadas, en particular, a la población rural pobre de los países en desarrollo.

La labor de adaptación debería beneficiar a los pobres y proteger los ecosistemas, los medios de subsistencia y la seguridad de las personas. Los proyectos basados en la comunidad brindan una oportunidad inmejorable para garantizar que estos proyectos sean apropiados cultural, técnica y socialmente, y para aumentar la capacidad de recuperación de la comunidad frente a los efectos del cambio climático.

Los programas de protección forestal deben defender los derechos de la comunidad, y los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y otras comunidades locales, prohibiendo toda medida que intente excluir de las zonas protegidas a los indígenas y a las comunidades cuya subsistencia depende de los bosques. No aplicar esta prohibición significa respaldar el racismo ambiental y poner en peligro prácticas de preservación de la cultura altamente desarrolladas.

Es de vital importancia que haya coherencia, desde la perspectiva del clima, en las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Algunas de sus políticas han propiciado la vulnerabilidad del clima y han debilitado la capacidad de recuperación de los países en desarrollo. Políticas mercantilistas que socavan el desarrollo sostenible son impulsadas por instituciones financieras que establecen condiciones para otorgar ayudas, por la OMC, y por los acuerdos de libre comercio ideados para abrir los mercados de los países en desarrollo.

¿Cómo se pretende que los países en desarrollo consideren prioritaria la incorporación del cambio climático en las políticas nacionales si las medidas internacionales exacerban la pobreza y la injusticia, desplazan a las pequeñas granjas y empresas, y permiten que poderosas empresas extranjeras exploten sus recursos naturales? Esta situación ha de revertirse mediante un proceso que también ha de ser coherente con las políticas de los países desarrollados.

Al igual que las ONG que tienen sus bases en los países en desarrollo, continuaremos haciendo todo lo posible para que estos países se comprometan a dar máxima prioridad al cambio climático. Ahora bien, no podremos llevarlo a la práctica a menos que las políticas internacionales complementen los esfuerzos nacionales. Si se abordan debidamente todas las cuestiones antes planteadas, cabe esperar que el sur adopte un comportamiento y unas políticas más favorables. 